

Bolivia: la recta final

Go MoldizMercado*

Bolivia ha ingresado en la recta final de la resolución de su crisis estatal –la cuarta en toda su historia-, que definirá el curso estratégico del tensionado y rico proceso político que enfrenta, cara a cara, a un insurgente bloque interesado en construir “el horizonte inesperado de nuestra época” y a otro bloque, altamente conservador, que tiene la mirada puesta en la restauración de un pasado que solo es posible como tragedia o comedia.

Esta recta final, a escasos dos meses y medio de haberse aprobado el proyecto de Constitución Política del Estado en la ciudad minera de Oruro, está dibujada, en sus posibilidades y límites, por la convocatoria a dos referéndum que hizo el presidente Evo Morales y el anunció de desacato civil y la ratificación de un referéndum por estatutos autonómicos que la derecha boliviana, agazapada en cuatro departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), pretende desarrollar hasta mayo.

Los dos referéndum convocados por el gobierno están directamente relacionados con la Asamblea Constituyente pues se trata de consultar a la población, en un misma fecha, su criterio sobre el límite máximo de la propiedad agraria –entre un mínimo de 5 mil hectáreas y un máximo de 10 mil- y si aprueba o no el texto constitucional que el MAS y otras 10 fuerzas políticas aprobaron en la primera semana de diciembre de 2007, luego de varios meses de bloqueo y presión de la derecha a través de sus comités cívicos y el ultraderechista Podemos.

El texto constitucional contiene aspectos que, sin duda, constituyen la razón de la radical oposición de la burguesía: la prohibición de privatizar los recursos naturales y del latifundio, el impulso de la autonomía desde el nivel departamental hasta los territorios indígenas, la revitalización del papel del estado en la economía y la constitución de la economía comunitaria, la plena garantía de derechos sociales y la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional.

A confesión de parte, relevo de prueba. El domingo 2 de marzo, en una concentración en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, dijo que si de referéndum hay que hablar este tiene que ser para definir la sede de la capitalidad –que fue un tema no contemplado que bloqueo la Asamblea Constituyente meses- y no sobre el límite máximo de la propiedad agraria.

Branco Marinkovic, de origen croata y militancia de extrema derecha, es uno de los empresarios de oleaginosas más grande de Bolivia y el que más cantidad de tierra no trabajaba posee en el departamento de Santa Cruz,

Ponencia presentada en el XII seminario anual Los partidos y una nueva sociedad, promovido por el Partido del Trabajo de México.

Esta edición en internet: www.lahaine.org

La derecha, en cambio, en una clara señal de su estado de intensa resistencia al proceso de cambio y de sus primeros pasos de ofensiva política frente a un gobierno que a veces se caracteriza por una combinación de iniciativa e inercia, ha convocado para el 4 de mayo, la misma fecha de los referéndum constitucionales, a una consulta popular para aprobar el contenido de sus estatutos, redactados por un grupo de consultores, que según ha reconocido un sector de la propia derecha boliviana, de origen más occidental, tiene una tendencia federalista incluso más radical que la vigente en otros estados federales del mundo, pues reclama para los departamentos competencias y atribuciones nacionales como las relaciones internacionales, la distribución de tierras, la recaudación de impuestos y la administración del tema migratorio interno, entre otros.

El proceso de resolución de la crisis de Estado por uno u otro lado, definida como bifurcación por el vicepresidente García Linera, se ha profundizado en la segunda quincena de febrero luego de fracasar llamado al diálogo que desde el Poder Ejecutivo, primero, y luego desde el Congreso, hizo el oficialismo a la oposición para alcanzar un acuerdo entorno a la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Constitución aprobada y los estatutos autonómicos.

La ruptura del diálogo entre oficialismo y oposición estaba dentro de lo esperado pues en octubre y noviembre del pasado año, a poco de fenecer el plazo dispuesto por ley para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, el gobierno tampoco pudo concretar su primer llamado al diálogo para forjar un acuerdo suprapartidario que el vicepresidente García Linera impulsó sobre el tema de la Constitución.

Los caminos para el diálogo parecen estar disminuyendo y la posibilidad de un enfrentamiento violento, que es alentado por la derecha y que no resolverá la crisis, se incrementa cada día a pesar de que el presidente Morales insiste, mediante un llamado a la oposición el 2 de marzo, a sentarse y ponerse de acuerdo.

Todo indica que los reiterados llamados al diálogo de parte del gobierno, al que paradójicamente los medios de comunicación no dejan de criticarlo por "autoritario", han sido percibidos como debilidad y no como fortaleza por la ultraderecha.

Tan es así que luego de que el gobierno convocara a los dos referéndum, para que el pueblo decida, los partidos de la derecha, los comités cívicos y los más importantes medios de comunicación, en una franca y abierta conspiración, han desatado una campaña nacional e internacional para quitarle al gobierno su esencia democrática y, por el contrario, legitimar los discursos conspirativos y métodos antidemocráticos de la oposición.

Dos apuntes necesarios. Primero, a dos meses de cumplido el segundo año del gobierno del presidente indígena, la hipótesis de estar ingresando en la recta final de la resolución de la crisis estatal tiene un valor más desde la política que desde el calendario. Es decir, esta recta final puede o no durar mucho tiempo,

pero lo evidente es que el proceso boliviano se mueve todos los días entre el pacto y la revolución. Pacto en términos no equivalentes al diálogo, que a veces pueden ser necesarios para ir construyendo hegemonía, sino de no avanzar hacia la superación de las relaciones de producción y poder capitalistas, y solo quedarse en lo simbólico. Revolución, en este siglo XXI, como un proceso de construcción de poderes imaginarios y reales de carácter no capitalista o “socialista comunitario”.

Segundo, a cada iniciativa de diálogo, incluso de pacto de parte del gobierno, la derecha responde con mayor radicalidad, lo cual parece demostrar que si hay un sector que no pretende “compartir el poder” es la derecha.

Métodos distintos

Por estar situados en ambos extremos de la historia, los métodos y discursos empleados por ambos bloques son diametralmente distintos. El gobierno, respaldado por un duro e impenetrable ejército desarmado de indígenas y campesinos, además de movimientos sociales urbanos menos numerosos y cohesionados, pero no por eso con la mirada hacia la luz final del túnel, trata de abrirse paso a través de medidas sociales que consoliden los espacios conquistados en la ardua disputa cotidiana. Ahí están, para ir a lo más inmediato, la Renta Dignidad –un bono de 200 bolivianos mes (equivalente a 25 dólares)- para los ancianos mayores de 60 años, el Bono Juancito Pinto para los niños en edad escolar hasta el octavo grado, la expropiación de tierra en el sureño departamento de Chuquisaca para distribuir las entre los indígenas guaraníes desposeídos que trabajaban en situación de esclavos en pleno siglo XXI y la promulgación del decreto supremo que pone en marcha la industria del Mutún.

Por contrapartida, apartada del principio liberal de “un ciudadano, un voto” y de otras reglas de la democracia representativa –la relación de mayorías y minorías, y el acatamiento de la ley y del estado de derecho-, sectores duros de la oposición política –partidaria, cívica y mediática-, han puesto en marcha una ofensiva política que apunta a derrocar al gobierno de Evo Morales, a quien, no obstante haber merecido el apoyo electoral nunca visto en la historia nacional (54%), continúan despreciándolo por su condición de indio.

La oposición al gobierno de Evo Morales se expresa por vías no partidarias y, por tanto, nada democráticas. Podemos y Unidad Nacional no han logrado aumentar su respaldo ciudadano y sus perspectivas no son precisamente de las mejores. El partido de Quiroga ha sido rebasado por las posiciones más duras de las elites cruceñas y es poco probable que aun acercándose a la radicalidad de los comités cívicos logre ampliar su espacio político. En el caso de Unidad Nacional de Samuel Doria Medina es tanto o más catastrófico que el primero. Han sido muchas las veces en las que a pesar de evocar una posición de centro ha terminado actuando al lado de Podemos y fracciones de la derecha más radical de naturaleza no partidaria.

Y ahí está precisamente la preocupación. La imposibilidad o las dificultades de la derecha de avanzar por vías electorales está empujando a que fracciones duras de las clases dominantes se inclinen por opciones no democráticas y que

constituyan una amenaza real para el gobierno y la propia vida del presidente Morales. Existe cada vez menos duda de que las organizaciones empresariales y las entidades cívicas de Santa Cruz, Beni y Tarija forman parte de un bloque opositor que se manifiesta, abierta u ocultamente, mediante mecanismos poco democráticos. No es casual que la Unión Juvenil Cruceñista, afiliada al Comité Cívico de Santa Cruz, haga uso de ciertas formas propias del paramilitarismo y que circule el rumor generalizado del entrenamiento militar de los opositores radicales al gobierno en haciendas de la capital oriental.

Lo grave, por tanto, no es la dureza con la que se ejerce oposición, pues forma parte de la política en momentos de irremediable choque de intereses. Lo grave es la naturaleza y la perspectiva con la que se la hace. "Aténgase a las consecuencias" sentenció, con acento de advertencia cerril, el prefecto del oriental departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, hace unos cuatro meses y en la última semana de febrero reiteró la advertencia el vicepresidente del Comité Cívico del mismo departamentos, Luís Nuñez, quien, con un tono de indisimulado racismo, invitó a irse de la región a los hombres y mujeres de origen indígena que no estén de acuerdo con los planes de las elites cruceñas.

La derecha boliviana está caminando progresiva y sistemáticamente hacia posiciones antidemocráticas, de franca subversión y a la puesta en marcha de acciones violentas, incluso armadas, que el gobierno de Morales se ha visto incapacitado de enfrentar. Citemos algunos ejemplos: las armas y municiones encontradas en una hacienda del departamento de Chuquisaca, el armamento incautado en Santa Cruz y devuelto por disposición de un juez cruceño a sus propietarios, los atentados contra el consulado venezolano y uno de los albergues de los médicos cubanos en la capital oriental, la quema y el apedreamiento de casas de dirigentes masistas en Tarija y Pando, los atentados dinamiteros contra la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y una oficina estatal de la Asamblea Constituyente en La Paz, la contratación de paramilitares colombianos que posan con el embajador estadounidense y las listas públicas pegadas en las calles de la ciudad de Sucre con nombres de personas no gratas en esa ciudad por su filiación masista e izquierdista, e incluso por sólo ser activistas de derechos humanos, y la convocatoria a las armas que dirigentes cívicos de dos departamentos del Oriente (primero del Beni y luego Santa Cruz) han hecho la última semana de febrero para derrocar a Morales.

La embajada de los Estados Unidos, como es obvio, está jugando su papel. El activo embajador Philip Goldberg, que asiduamente visita cada 15 días a los dirigentes cívicos en Santa Cruz, no ha podido responder a varias acciones que dan señales sobre la conspiración de ese país contra el gobierno indígena. Las denuncias van desde el apoyo financiero que USAID brinda a los prefectos y partidos opositores, su relación con un paramilitar colombiano (cuya foto Evo Morales mostró en la Cumbre Iberoamericana de Chile), su control de dos organismos de inteligencia bolivianos (Getide y ODEP) y el pedido que su asesor en seguridad hizo a becarios estadounidenses de espiar a médicos cubanos y funcionarios venezolanos en Bolivia.

De esto poco o casi nada ha informado el aparato mediático de propiedad de una burguesía agroindustrial altamente conservadora, que con su ofensiva ideológica quiere construir, sobre todo en las clases medias, la base social para la fascistización del país. Todo lo contrario, la industria mediática –otro de los ejes de la conspiración- no se cesa de construir en el imaginario colectivo la idea de que Bolivia es presa de una ofensiva totalitaria, chavista y dictatorial.

Con estas acciones y advertencias como la desobediencia civil, la democracia, que suena hueca y contradictoria cuando se comparan palabras y hechos, se va perdiendo como escenario de legítima disputa política e ideológica de los actores por la hegemonía, entendida esta como la construcción o preservación simbólica y real de un sistema de valores y creencias en torno a los cuales se organice el Estado, la economía y la sociedad.

A confesión de parte, relevo de prueba. Incluso el más centrista de la oposición, el empresario Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, ha advertido el domingo 2 de marzo, que los referéndum lanzados por el gobierno con suerte se llevarán a cabo en solo tres de los nueve departamentos del país.

La democracia y el respeto a la ley están siendo sustituidos por una violencia que busca pasar de la resistencia a una ofensiva legitimada ante sectores de la sociedad y que busca deslegitimar el uso legítimo de la coerción de parte del Estado.

El gobierno ha promulgado una ley en la que ilegaliza la consulta por los estatutos autonómicos que la derecha boliviana ha lanzado. Pero no es suficiente que el vicepresidente García Linera haya advertido que, si se hacen, será contra la ley, sino que el Estado tendrá que probar su capacidad de sancionar, como todo Estado, esas ilegalidades. Si no lo hace, ese momento el Estado estará a la defensiva y la disputa habrá sido ganada por una derecha que, para ser más precisos, sigue al pie de la letra los mandatos de los mismos que desean la derrota bolivariana en Venezuela y que no pierden la esperanza de la reversión de la revolución cubana.

Las perspectivas de la crisis estatal y del gobierno

A dos años de gobierno del presidente Morales, las perspectivas son inciertas. Como señala una politóloga comprometida con los intereses de la derecha: “si se cae se profundiza la crisis, si se queda se profundiza también, pero más lento”¹.

A pesar de que la industria mediática se ha colocado, junto a la dirigencia cívica, a la vanguardia de la lucha contra el primer presidente indígena de Bolivia, el gobierno mantiene un respaldo ciudadano de cerca del 55% y Evo

¹ Jimena Costa, en un artículo –mentiras piadosas-, difundido por Internet.

Morales se mueve alrededor del 60 y 70%, según los sondeos de opinión realizados entre diciembre de 2007 y febrero de 2008.

El importante respaldo político y social del que goza el presidente Morales está relacionado directamente con el cumplimiento del programa construido colectivamente por el pueblo en 20 años de resistencia al modelo neoliberal, particularmente en la denominada "Agenda de Octubre" de 2003 que provocó la renuncia a la jefatura de Estado del entonces liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, quien declarado rebelde por la justicia boliviana se encuentra refugiado en los Estados Unidos.

La nacionalización de los hidrocarburos, todavía en proceso; la convocatoria a la Asamblea Constituyente, con su texto ya aprobado y sujeto a veredicto popular, y el proceso de recuperación de las empresas estatales, como las mineras Vinto y Huanuni, uno de los yacimientos más ricos en estaño del mundo, explican ese apoyo.

A eso hay que agregar la derogación del artículo 55 del decreto supremo 21060, el incremento de salarios en un promedio del 11 por ciento el primer año y en cerca del 7 por ciento en 2007, la "tarifa dignidad" en el servicio de energía eléctrica para las familias más pobres, la puesta en marcha de una revolución agraria, el acceso al crédito de los pequeños productores en condiciones altamente favorables a través del programa ALBA/TCP y el estatal Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

También le ha dado réditos al gobierno la aplicación de una política social nunca vista en la historia nacional en beneficio de los sectores sociales que siempre fueron excluidos. Más de 9 millones de atenciones médicas, más de 100.000 hombres y mujeres que recuperaron la vista, casi treinta hospitales instalados y medio millón de personas incorporadas al programa de alfabetización "Yo sí puedo". Todo esto gracias a la solidaridad del gobierno y pueblo cubanos.

La implementación de una política exterior soberana y digna también le ha significado respaldo en amplios sectores sociales. La embajada de los Estados Unidos ya no decide la elección de autoridades dentro del país, hay una política de lucha contra el narcotráfico que no arremete y pisotea a los bolivianos, por citar algunos ejemplos.

Pero si hay algo que es el dato más importante de la evolución favorable de la crisis estatal, es la revalorización de la democracia en el imaginario colectivo, como centro de tensiones y acuerdos. La democracia, concebida como una construcción social y política permanentes, ha recuperado el espacio perdido y ha aumentado su prestigio, desde dos puntos de vista centrales: el primero, la gente percibe que está mejor representada, y, segundo, que es un espacio de mayor participación.

El gobierno de Evo Morales le ha devuelto a la democracia representativa su verdadera esencia: que los representantes actúen en función de los mandatos

de sus mandantes. Es por eso completamente entendible que un 54% de los bolivianos, según el PNUD, se incline por un “gobierno directo del pueblo”.

Pero, como está dicho a inicios de este artículo, la crisis estatal se mantiene de distintas formas, aunque los espacios de maniobra de los bloques en pugna se van recortando rápidamente y es altamente probable que la resolución estratégica del proceso boliviano, ya sea como victoria o como derrota, vaya a darse en los próximos meses.

A pesar de la fuerza política y social con la que Morales asumió la conducción de este pequeño país situado en el corazón de Sudamérica, errores de dirección, producto quizá de la heterogeneidad de visiones dentro del gobierno y el MAS, no aceleraron todavía una salida a su favor de la crisis estatal.

La crisis de hegemonía se mantiene. El sistema de creencias y valores en torno a los cuales se organizó el Estado, la sociedad y la economía en los 182 años de república y 20 años de neoliberalismo ya no juega el papel de “cemento” como diría Gramsci, pero al mismo tiempo, a pesar de la revalorización de lo indígena, dentro y fuera de Bolivia, el bloque emergente no ha tenido la suficiente capacidad de construir significativamente en el imaginario de la población un nuevo proyecto de estatalidad y orden social.

Una manifestación de esta suerte de “empate de creencias” es el temor en sectores sociales, aún subalternos, cuando se habla de la hegemonía indígena-popular o de la construcción de un Estado y una economía social comunitaria como ha definido el proyecto de Constitución aprobado en diciembre y que será sometido a consulta en mayo próximo.

Como lógica consecuencia de lo anterior, la alta dinámica del proceso boliviano, en el cual por lo general los procesos políticos son cortos, no se ha traducido, ni siquiera en germen, el nuevo Bloque Histórico en el Poder, es decir de un nuevo tipo de relación entre la estructura y la superestructura, entre el Estado y la sociedad. La causa más importante es que en el gobierno existen una diversidad de tendencias ideológicas pues las hay desde los que apuestan a un “buen capitalismo con los indígenas incluidos” y que siguen mirando al Estado como un simple regulador de la economía, hasta los que hablan de un “socialismo comunitario” que no terminan de definir.

Otra de las expresiones de la indefinición estratégica del gobierno tiene que ver con la matriz productiva. Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo se apuesta por modificar el patrón de acumulación que ha regido en este país sudamericano desde antes de su fundación, caracterizado por su carácter monoprodutor y monoexportador (primero de plata, luego de estaño y ahora de gas), la composición de su presupuesto general y la prioridad otorgada a la industria petrolera y minera parece más bien mantener una visión extractivista, dejando en lugar secundario a la industria transformadora.

El presidente Morales, en su informe de gestión del 22 de enero de 2008, anunció que este año se iba a profundizar la instalación de plantas y fábricas estatales y alentar la constitución de “empresas comunitarias”. Sin embargo, no

todos los que están en su gabinete, principalmente económico, creen en la necesidad de una mayor intervención del Estado en la economía y en la importancia histórica de avanzar hacia formas de organización productiva que superen la enajenación del trabajo.

Quizá la base de estas contradicciones esté en el Plan Nacional de Desarrollo que define que la matriz productiva estará constituida por dos sectores estratégicos: uno, generador de excedentes (petróleo y minería, además del forestal) y, otro, generador de empleo e ingresos (industria manufacturera), con lo que, en los hechos, se asigna al país la misma condición de la que se pretende escapar.

Con ese razonamiento y las contradicciones apuntadas, nada distinto al desarrollado en toda la república, se diluye la propuesta de construir un patrón de acumulación diverso que sea resultado de la articulación de la industria extractiva y la industria transformadora, pero también de la complementariedad del sector moderno de la economía con el sector tradicional como prefiere definir Álvaro García Linera a las formas de organización económicas no capitalistas.

Por eso no es casual ni un accidente que el PNUD en su informe anual de Desarrollo Humano señale que la coyuntura económica y política boliviana “pondrá a prueba ese patrón de dependencia”. Al finalizar 2006, Bolivia ha logrado sus mejores indicadores económicos y de seguro que, al margen de lo ideológico-político, ha sido de gran beneplácito para las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en términos de una disciplina fiscal, aumento significativo del volumen de las exportaciones y un incremento de sus reservas internacionales netas, que se guardan en dólares en la Reserva Federal de Estados Unidos, cercanas a los 5 mil millones de dólares, una cifra nunca vista en un país pobre como el boliviano. Para aprovechar positiva y estratégicamente los ingresos generados por la exportación del gas, los cuales podrían aumentar significativamente por su anunciada industrialización, se “requiere de su transformación en una economía de muchos sectores y muchos actores productivos”².

“La coyuntura de corto y mediano plazo es excepcional para enfrentar el reto de construir una economía de base ancha a partir del gas”³, apunta el informe del PNUD. Y tiene razón. El gran desafío del gobierno, hasta ahora insuficientemente atendido, es aprovechar los altos precios de las materias primas, producto de la creciente demanda de los mercados chino e indú principalmente, para orientar esos recursos hacia otros sectores de la economía.

Otra manifestación de la crisis estatal, por tanto, es que la base material del poder de las clases dominantes no ha sido afectada. El modelo neoliberal no ha sido sustituido y la gestión económica, consiguientemente, no ha podido escapar de los problemas y los mecanismos con los que se enfrentan esos problemas. No se puede construir una sociedad no capitalista con los

² PNUD, *Op. cit.*, p. 440.

³ PNUD, *Op. cit.*, p. 471.

mecanismos y las fórmulas del capitalismo, podría afirmarse a manera de recuperar las enseñanzas del Che. El tema de la inflación es uno de ellos. Ha diciembre de 2007 se llegó a un 12% del 6% previsto por el gobierno y este año es altamente probable que supere la barrera del 15%, según estiman analistas.

El gobierno ha enfrentado el problema con medidas de corte monetarista que se muestran insostenibles en el mediano plazo (como la excesiva apreciación del boliviano y la venta de títulos de valor a través del Banco Central que han arrojado grandes ganancias a la banca privada) y poco o nada se ha avanzado en temas de incremento de la oferta por la vía de una mayor atención a la producción.

La población está preocupada por la posibilidad de que se reedite la experiencia del gobierno del reformista Hernán Siles Suazo (1982-1985), cuando se produjo, con una alta intervención conspirativa del sistema financiero y los empresarios, un proceso hiperinflacionario que terminó con la base política y social de la UDP y determinó el adelanto de elecciones generales que abrieron paso a 20 años de secante neoliberalismo tras el triunfo de Víctor Paz Estenssoro.

Las causas de la inflación tienen que ver con un crecimiento de la economía, derivado de los ingresos del petróleo, que no se traduce en un aumento de la producción ni en el cambio de dirección del patrón de acumulación, pero también con una especulación provocada por los empresarios agroindustriales de Santa Cruz, similar a las experimentadas en el Chile de Salvador Allende y Venezuela de Chávez, ya que controlan cerca del 80% de la industria de alimentos básicos como el arroz, trigo, azúcar, aceite y carne. La derecha hace buen uso de esa realidad y la utiliza para golpear al gobierno de Morales, a quien atribuye la elevación de precios y las primeras señales de desabastecimiento.

Y nuevamente volvemos a la indefinición estratégica. Aún cuando el tema de la seguridad alimentaria es de carácter estratégico, más aún en momentos en que el imperialismo alienta la producción de la materia prima para el biodiesel, el gobierno ha dispuesto unos 600 millones de dólares para que empresarios de todos los tamaños (micro, pequeños, medianos y grandes) puedan enfrentar sus problemas derivados de los desastres naturales, pero no hay ninguna certeza de que sus esfuerzos vayan destinados paralelamente a modificar la estructura de propiedad y, por tanto, a alterar el modelo vigente.

Y el tema del poder

Que el tema fundamental de toda revolución es la cuestión del poder, es algo que no termina de ser precisado por los principales actores del proceso boliviano. La indefinición estratégica se la respira por todos los poros. En el gobierno, el MAS y los movimientos sociales se perciben señales contradictorias que van desde el convencimiento de sustituir al bloque dominante hasta solo proponer su ampliación con los que han estado excluidos durante casi dos siglos.

El vicepresidente Álvaro García Linera se encarga de incorporar elementos de debate y polémica sobre la definición estratégica del gobierno. No se trata de sustituir a un bloque por otro, sino más bien de la puesta en marcha de una concepción estratégica que conduzca hasta su ampliación. Hace más de un año, partidario más del “capitalismo andino” que de un proyecto socialista, el intelectual y político sostiene con claridad: la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos: que el sector emergente desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior; que este bloque de poder antiguo logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente; o que entre ambos lados se logre redistribuir el poder”⁴. Entonces estamos en que la revolución “democrática y cultural”, con un claro eje articulador indígena⁵, apunta a un desenlace “no clásico”. No se trata de que el bloque histórico en el poder se construya sobre la base del desplazamiento de las clases dominantes, sino que más bien ellas asuman la ampliación por la vía de la descolonización.

¿La salida pactada a la crisis estatal boliviana es una respuesta de largo plazo, de profundos contenidos estratégicos, o más bien una respuesta inevitable a una situación de equilibrio inestable de fuerzas? Si la “redistribución del poder” es de largo aliento, está claro que la “revolución democrática y cultural” de Evo Morales es una continuidad de la revolución nacional de 1952. Este enlace del “nacionalismo plebeyo” con la revolución inconclusa del 52 colocaría al proceso boliviano, hablando con rigor, más como cambio que como revolución. Pero, como es obvio, con características distintas.

En primer lugar, el sujeto articulador ya no sería la pequeña burguesía mestizo-blancoide ni mucho menos la debilitada clase obrera. El sujeto articulador sería lo indígena, aunque con la preservación de sus contradicciones de clase al interior. De esta manera se estaría frente a un “nacionalismo plebeyo” en el cual el indígena, excluido de anteriores procesos, llegaría a formar parte del intocado bloque en el poder.

En segundo lugar, el objetivo estratégico ya no sería la modernización de la economía en el sentido de negar la economía tradicional o de cooptarla al comportamiento de las fuerzas productivas capitalistas. Ya no se trata de elegir entre un modo de producción u otro, sino más bien en buscar su complementariedad. De esta manera, la estructura económica boliviana tendría “un espacio para el desarrollo tanto del capitalismo como del poscapitalismo”⁶.

Pero volviendo al tema de la factibilidad de la salida pactada o de la continuidad del proceso revolucionario. Hay dos posiciones al respecto.

Una, de carácter afirmativo por el pacto. La base de este razonamiento se encuentra en el retroceso que Bolivia ha experimentado con la aplicación del modelo neoliberal aun dentro de un contexto capitalista. Esto implica reconocer

⁴ *Semanario Pulso*, Edición 399, del 25 de mayo al 31 de mayo de 2007, La Paz, pp. 12-13

⁵ En *Pulso*, Edición 399, García Linera afirma: “apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena”.

⁶ *Ibidem*.

la necesidad de apostar al desarrollo capitalista por la vía de una decidida participación del Estado, ya no sólo como normador sino como actor productivo. La idea, por lo demás, es que no habiendo Bolivia cumplido su etapa de desarrollo significativo de las fuerzas productivas, le corresponde, vía articulación con la economía no capitalista, encarar la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia.

Esta línea de razonamiento tiene adeptos. El criterio, como es bueno insistir, parte de la premisa de que las banderas reformistas de la década de 1970, reflejadas por la corriente cepalina, constituyen en la actualidad una respuesta a la situación de atraso, miseria e injerencia del imperialismo. Es más, representa una manera adecuada de estructurar una nueva “alianza de clases” en torno a una causa común y respecto de una amenaza común. La causa común es la necesidad de un desarrollo nacional como respuesta a la globalización neoliberal.

La otra, es de carácter negativo frente al pacto y de apuesta por la revolución. El punto de partida es que Bolivia ha vivido otras experiencias nacionalistas que no han llegado a buen puerto y que parecen obligar a transitar por un camino que, aun sin negar coyunturalmente el capitalismo, no tanto como necesidad sino como realidad, apueste a un salto cualitativo en lo estratégico hacia una organización social, económica y política, así como a una nueva estatalidad, no capitalista.

El razonamiento no deja de apoyarse en la experiencia histórica. Bolivia es rica en intentos nacionalistas desde la década de los treinta, para no ir más lejos. Gobiernos como Busch y Toro, en los que se nacionalizó el petróleo por vez primera, así como otros de carácter populista como el de Gualberto Villarroel, terminaron en derrotas. Lo propio sucedió en la década de los setenta con Juan José Torres, el “general del pueblo”, quien al no superar su tendencia nacionalista y al no actuar en correspondencia con las expectativas de la Asamblea del Pueblo de avanzar hacia el socialismo, fue derrocado el 21 de agosto de 1971 por la extrema derecha liderada por el general Hugo Banzer Suárez.

La propia revolución de 1952, que implicó una superación de las relaciones de producción semi-feudales y el establecimiento de una línea claramente capitalista en todos los órdenes –nacionalización de las minas, la universalización del voto y la reforma educativa-, capituló ante el imperialismo apenas cuatro años después, en 1956, con la aceptación a los Estados Unidos de poner en marcha el Plan Eder.

Este tipo de derrotas de los intentos nacionalistas quizá encuentra su explicación en el rechazo que el imperialismo y las clases dominantes le tienen incluso a las más tímidas reformas realizadas dentro del propio capitalismo y a la imposibilidad de impulsar y construir un proyecto nacionalista a más de dos siglos de que el capitalismo ingresara en su fase superior.

Pero el argumento más importante de la hipótesis de que la revolución boliviana debe avanzar en una perspectiva no capitalista, lo que en buenas

cuentas significa hacia una sociedad socialista, es que debe superar lo que en 1952 ya se conquistó: el establecimiento de las relaciones capitalistas de producción. Es decir, no obstante que la revolución de 1952 no cumplió con los objetivos que se había propuesto, como el del impulso a un capitalismo nacional y de una burguesía nacional, le corresponde a la revolución en el siglo XXI construir un proyecto estatal no capitalista.

Ya sea para una salida capitalista con protagonismo indígena o para ir construyendo el “socialismo comunitario”, hasta ahora no terminado de construir en términos teóricos, el gobierno está ante el gran desafío de ampliar su reiterado énfasis en lo indígena-campesino mediante la incorporación de un discurso político y simbólico que aliente la adhesión a su proyecto a corrientes democráticas y progresistas de sectores urbanos, a los cuales, dicho sea de paso, el gobierno no les ha afectado con ninguna de sus medidas. Es más, amplias fracciones de clases medias se han beneficiado con el acceso a la medicina cubana y con la relativa tranquilidad recuperada en sus espacios de acción.

El gobierno, los movimientos sociales y el MAS tienen la palabra. La construcción y ampliación de su mayoría e intención de establecer un nuevo “sentido común” y de alcanzar, como diría Jean Paul Sartre, “el horizonte inesperado de nuestro tiempo”, depende de la capacidad que tenga, sin negar lo indígena como sujeto histórico del cambio, para estructurar un nuevo bloque histórico.

El gobierno está obligado a dar señales de que Bolivia cambia pese a todo y de que la revolución, como despliegue de fuerzas creadoras, constituye la garantía para avanzar, después de 182 años de más sombras que luces, hacia una sociedad en la cual se vayan superando todas las formas de enajenación del ser humano. En cambio, la derecha, sin cuya construcción y mente colonizadora frente al “Otro” la situación sería distinta, no tiene otra que aferrarse y agarrarse con algo más que uñas a un pasado excluyente que sólo los pequeños grupos privilegiados la quieren mantener invariable en el tiempo.

La crisis estatal está en su recta final. De ella saldrá victorioso el bloque que más inteligencia, iniciativa y fuerza tenga. La tensión entre democracia y violencia se hará más visible, pero una de ellas se impondrá sobre la otra, de eso no hay duda. La capacidad del gobierno para defenderse está en juego, pero sobre todo para acortar favorablemente los tiempos y administrar sabiamente los ritmos. Si no lo hace, volviendo al punto de partida de este análisis, los resultados de los dos referéndum son impredecibles y quizá seguro anticipo de la irrupción de otro escenario: la convocatoria a un referéndum revocatorio o el estallido de la violencia a iniciativa del imperialismo y la derecha.

* Primer Secretario de Patria Socialista Movimiento Guevarista de Bolivia.